

Muerte y política (Eloy Alfaro)

Wladimir Serrano*

CENTENARIO DEL ARRASTRE

MUERTE Y POLITICA

EL filósofo francés Henri Bergson invoca a la facultad fabuladora de la mente humana, creadora de mitos que marchan paralelamente a la historia. Y Latinoamérica no se ha sustraído a esa tendencia en los últimos 60 años.

El académico Olaf B. Rader escribió un libro titulado “Tumba y Poder”, para desentrañar la afición tanatofílica de muchos regímenes políticos. Entre los diversos aportes de esta obra, se encuentran evidencias de cómo algunos gobiernos utilizan a personas muertas para profundizar sus raíces históricas y justificar un nuevo proyecto político. En este sentido, pese a la enemistad entre Adolfo Hitler y el presidente Paul von Hindenburg, cuando éste último falleció, el Canciller del Reich desplegó un enorme aparato para

sus funerales y en su discurso proclamó el ingreso de Hindenburg al Walhalla (paraíso de los héroes en la mitología germana). Al fallecimiento de Vladimir Ilich Lenin, sus sucesores mandaron momificarle, repartieron el cerebro entre múltiples investigadores para descubrir las causas de su genio y erigieron un mausoleo, que fue visitado por millones de personas a lo largo de casi 70 años, con lo cual la atea Unión Soviética contó con su propio “dios”.

Esta actitud señalada por Rader responde a lo que el filósofo francés Henri Bergson denomina la facultad fabuladora de la mente humana, creadora de mitos, que marchan paralelamente a la historia.

Latinoamérica no se ha sustraído de esta tendencia en los últimos 60 años; y así, por ejemplo, en Cuba, el natalicio de José Martí es celebrado con desfiles nocturnos de antorchas; igualmente en Venezue-

* Wladimir Serrano, escritor e historiador.

la, Hugo Chávez, ha instaurado un culto a Bolívar, acusando a las supuestas oligarquías bogotanas de su muerte.

El presidente Rafael Correa, en nuestro país, ha adoptado a Eloy Alfaro como su inspirador histórico. Por lo mismo, no causa asombro que, en el centenario de su cruenta muerte, la actual ministra de Patrimonio proponga cambiar la partida de defunción en la que se dice que fue el pueblo el que mató a Alfaro. Como se podrá observar, esto se encuadra en el contexto antes mencionado de la sacralización de líderes políticos, pero con toda razón los historiadores de cualquier signo ideológico se opondrán a la alteración de documentos. Además en la visión de este alfarismo moderno, no es concebible que un líder revolucionario que realizó cambios fundamentales haya sido agredido por el pueblo beneficiario de las transformaciones, sino que las causantes de los asesinatos debieron ser las oligarquías afectadas.

El mismo hecho horrendo que constituyó el asesinato de Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Manuel Serrano, Luciano Coral, Ulpiano Páez y con anterioridad el de Pedro J. Montero, “el tigre del Bulubulu”, obligó a que en ese mismo tiempo se investigara quiénes fueron los responsables del delito. En el propio 1912, Olmedo Alfaro publicó un libro titulado “El asesinato del general Eloy Alfaro ante la

historia y la civilización” revelando los nombres de quienes participaron directamente en el crimen. Luego, se instauró un proceso en el que actuó de fiscal el notable juriconsulto Pío Jaramillo Alvarado, acusando a un gran número de personas el haber intervenido en el hecho, ya fuere en el arrastre de los cuerpos, que además lo hicieron por turnos; en la compra de leña para la pira, y a los que incentivaban a la multitud para la consumación del linchamiento. Se denunció también a funcionarios públicos, como el ministro Octavio Díaz , quien se había entrevistado con José Cevallos, uno de los actores del hecho. Incluso el fiscal Pío Jaramillo Alvarado acusó directamente al gobierno interino de Carlos Freile Zaldumbide como el responsable de tan horrendo acontecimiento. Por lo mismo, al haber actuado, bien como autores o alentadores, el número de personas fue extremadamente grande para ubicar únicamente en unas la responsabilidad. A todo esto, hay que agregar que la segunda administración del general Eloy Alfaro estuvo llena de confrontaciones y que el Gobierno actuó con extrema mano dura en la represión de sus opositores. Así, agredió a balazos a estudiantes universitarios, dirigidos por Belisario Quevedo, que habían conformado clubes para impedir los reiterados fraudes electorales de los que se acusaba al Gobierno. El 25 de abril de 1907, gracias a que Alfaro consiguió facultades extraordinarias

del Congreso, actuó la fuerza pública para reprimir la manifestación. Murieron tres personas, se detuvo y juzgó a estudiantes, persiguiéndose aun a sus defensores, como fue el caso del doctor Luis Felipe Borja hijo, quien presentó acusación contra el Régimen, en nombre de la madre del estudiante Alejandro Salvador, uno de los fallecidos en la protesta. De inmediato, el Gobierno comunicó al abogado que tenía el plazo de ocho días para abandonar el país.

Esto causó un sentimiento de rechazo generalizado en la opinión pública, que fue variando a favor del mandatario por la culminación de la obra del ferrocarril y el peligro de guerra con el Perú en 1910, porque el laudo arbitral del Consejo de Estado de España favorecía la tesis territorial del vecino del Sur. La propia obra del ferrocarril se empañó, pues, a pesar de la integración nacional que significó, sus fletes de transporte se consideraba extremadamente altos en relación a los precios de otros ferrocarriles del mundo, a tal punto que se decía que resultaba más barato importar trigo y cebada de Chile y California que traerlos de la Sierra. Esta situación llevó a que el Congreso destacara una comisión para investigar el problema, la que sugirió que el Gobierno “gestione la absoluta eliminación del Mister H. Harman, como gerente de la empresa de ferrocarriles”.

En 1910, dado los costos del ferrocarril, el Congreso Nacional se

ocupó de un posible arrendamiento del Archipiélago de Galápagos, propiciado por el Gobierno de Alfaro, quien había recibido propuesta de los Estados Unidos para alquilar las islas por \$ 15 millones por un plazo de 90 años. El Presidente quería realizar esa transacción porque, además, consideraba que las islas no reportaban ninguna utilidad al país.

Alfaro debía culminar su período presidencial en agosto de 1911, y por lo mismo, se realizaron elecciones a principios de ese año. Los candidatos fueron Emilio Estrada, persona culta, y Flavio Alfaro, sobrino del presidente, quien tenía verdadera obsesión por el poder. Triunfó Estrada, que había sido el candidato de Alfaro. Sin embargo, el “Viejo luchador” cambió de opinión y presionó a Estrada para que renunciara. Como no lo consiguió, convocó a Congreso Extraordinario buscando la anulación de las elecciones. El Ejército y el Congreso se dividieron, lo que motivó la intervención de la Junta Patriótica, creada por Alfaro para enfrentar el problema territorial de 1910 y que fue presidida por el arzobispo González Suárez, la que advirtió al Congreso que la soberanía del país no residía en el Parlamento sino en la nación y que, por lo mismo, si se anulaban las elecciones, el Congreso violaría la Constitución.

Corrieron rumores sobre golpe de Estado. El 11 de agosto de 1911, una asamblea reunida en el Municipio de Quito desconoció a Alfaro.

Parte del Ejército que se alejaba del caudillo produjo un levantamiento al grito de “viva la Constitución”; una multitud agresiva recorría las calles generando atropellos y saqueos. La fracción militar leal a Alfaro avanzaba hacia Quito. Debió intervenir él mismo, deteniendo la incursión, pero exigió que se le de garantías para alojarse en la Legación chilena y salir del Ecuador. Efectivamente, atravesó la plaza de la Independencia protegido por el ministro chileno Víctor Eastman Cox, hasta llegar al actual Banco Pichincha, en donde se encontraba la representación diplomática de ese país. Renunció al poder y prometió no volver a intervenir en política.

El presidente del Senado, Carlos Freile Zaldumbide, se hizo cargo por 22 días. El ambiente adverso a Alfaro y sus amigos se hacía sentir; sin duda esto tenía que ver con los reiterados fraudes electorales realizados por el ala extrema del alfarismo antes mencionado, los ataques a los periódicos contrarios al Gobierno, que incluyeron la clausura de *El Comercio* y la prisión de los hermanos Mantilla Ortega, que intentaban ser independientes. Todo esto permite comprender que el país deseaba cambiar de régimen y, por lo mismo, Emilio Estrada recibió respaldo y creó expectativas cuando asumió la Presidencia el 31 de agosto de aquel año. Lamentablemente, por su corto Gobierno (murió en Guayaquil el 22 de diciembre de 1911 de infarto car-

díaco), no pudo consolidar un proyecto político alternativo, por lo cual se hizo cargo del poder nuevamente Carlos Freile Zaldumbide, quien pertenecía a la clase alta quiteña. Dedicado al campo, buscó mejorar la ganadería, introduciendo la raza Holstein. Fue partidario y amigo de Alfaro, habiendo sido gobernador de Pichincha, ministro de Estado, rector de la Universidad Central, vicepresidente de la República, presidente de la Asamblea Constituyente de 1906 y presidente del Senado, por lo cual, de acuerdo con la Constitución mencionada, asumió el encargo del poder. Existe una fotografía tomada el 25 de junio de 1908 de un homenaje organizado por Freile con motivo del cumpleaños de Alfaro y la llegada del ferrocarril, donde se encuentran personajes de la alta sociedad quiteña. ¿Significa esto entonces que parte de la oligarquía estaba con Alfaro?. Probablemente más tarde, la relación entre Freile y el líder radical debió enfriarse. Pero tampoco accedió días después del arrastre de los Alfaros a los deseos del General Leonidas Plaza de volver a la Presidencia, y tras el asesinato de su ministro leal Julio Andrade, renunció a su cargo y fue reemplazado por Francisco Andrade Marín.

El resto de la historia es conocida; a la muerte de Estrada, Flavio Alfaro y Pedro J. Montero, se levantaron en contra del Gobierno interino de Carlos Freile Zaldumbide, el uno en Esmeraldas y el otro en Guayas.

Eloy Alfaro regresó para mediar entre sus lugartenientes. El Régimen de Freile no estuvo dispuesto a negociar con los sublevados, envió al Ejército comandado por los generales Leonidas Plaza y Julio Andrade, el que se enfrentó con los rebeldes de Huigra, Naranjito y Yaguachi, donde hubo miles de muertos, lo que enardeció más a la ciudadanía. Derrotados los Alfaros, como se les decía entonces, corrieron la suerte antes descrita. Esta historia no se puede cambiar plebiscitariamente, pero sí asimilar la lección para evitar la intolerancia y el autoritarismo.